



**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE PEREIRA**

Referencia:	Medida Cautelar – Restitución de derechos territoriales a víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas
Radicación:	66001 31 21 001 2015 00078 00
Solicitantes:	Comunidad Indígena del Resguardo La Albania, Pueblo Embera Chami
INTERLOCUTORIO	

Pereira, Risaralda diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2.016)

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Juzgado a resolver la solicitud de medidas cautelares presentada por la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en favor de la comunidad indígena del Resguardo La Albania, perteneciente al Pueblo Embera Chami.

HECHOS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD

En el líbello introductor se informa por parte del representante judicial de la comunidad indígena del resguardo La Albania, designado por el Director Territorial Valle del Cauca –Eje Cafetero de la Unidad de Restitución de Tierras, que actualmente se adelantan por parte de esa entidad los estudios preliminares pertinentes a fin de establecer el cumplimiento de los requisitos legales para continuar con la etapa administrativa y posterior proceso judicial, en procura de la protección de los derechos territoriales étnicos para los pueblos indígenas. Sin embargo, durante el trabajo inicial de recolección de información institucional y en campo, se estableció que existen situaciones de alta complejidad en relación con la seguridad, consecuencia de la presencia de grupos delictivos organizados, reflejadas en la imposibilidad de ejercer sus derechos a la autonomía y gobierno propio, toda vez que son obligados a cumplir las órdenes contrarias a la cosmovisión Embera Chamí.

Según relatos de la comunidad, grupos delictivos organizados dedicados al tráfico de estupefaciente, como el denominado “Cordillera”, se encuentran ejerciendo control territorial en el área geográfica en la cual se ubica el resguardo de La Albania, en alianza con grupos armados organizados, para el tránsito de drogas y expendio dentro de territorio indígena.

Las acciones de los grupos delincuenciales consisten en forzar a los pobladores a expender drogas, distribuir dosis a menores de edad para estimular el consumo e intimidar y amenazar a las personas integrantes del resguardo, especialmente líderes y guardianes indígenas, quienes se encuentran en un grave estado de indefensión y temor de que las amenazas se materialicen en hechos fatales.

Se plantea además que, el tráfico interno de sustancias estupefacientes denominado micro tráfico, se enmarca en la disputa por el control de la actividad ilícita en la región del bajo occidente de Caldas que comprende municipios de Anserma, Viterbo, Belalcazar y Risaralda, por parte de grupos delincuenciales reconfigurados a partir del proceso de desmovilización de las autodefensas unidas de Colombia -AUC-, por lo que se entiende como manifestación del conflicto armado colombiano.

PRETENSIONES

Con fundamento en el artículo 151 del Decreto Ley 4633 de 2011, por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, se solicita la adopción de las siguientes medidas cautelares:

a. Medidas de protección

- Ordenar a la Unidad Nacional de Protección -UNP- otorgar un esquema de seguridad al gobernador del resguardo La Albania y adelantar en conjunto con las autoridades locales, los procesos de valoración del riesgo de los líderes comunitarios, para definir la asignación de esquema de seguridad.
- Ordenar a la Unidad Nacional de Protección - UNP, Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas, cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del colectivo del resguardo, para lo cual debe concertar con la comunidad las acciones afirmativas.

b. Medidas de fortalecimiento de la seguridad

- Ordenar a la Unidad Nacional de Protección – UNP que, en un término no mayor a seis (6) meses, establezca un proceso de fortalecimiento estructural, logístico e integral de la guardia indígena.
- Ordenar al Ministerio del Interior implementar medidas de atención y capacitación a los líderes de la comunidad indígena y la Guardia Indígena para el fortalecimiento del gobierno propio y se les forme en relación con sus derechos étnicos.

c. Denuncias de los líderes indígenas

- Ordenar a la Fiscalía General de la Nación que, de forma inmediata adelante las investigaciones correspondientes a las denuncias realizadas sobre las amenazas recibidas por los líderes indígenas.

d. Protección Jurídica de los predios

- Ordenar la inscripción de la solicitud de restitución de tierras en los folios de matrícula de los predios El Encanto y Sinaí.
- Ordenar a la Agencia Nacional de Tierras la activación de los procedimientos de protección de la posesión de territorios ancestrales o tradicionales, conforme con el Decreto 2333 de 2014, respecto de los predios El Encanto y Sinaí.

e. Atención a menores de edad afectados por el consumo de drogas

- Ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, implementar un plan de asistencia a cada uno de los indígenas menores de edad, afectados por el consumo de drogas ilícitas, acorde a la cosmovisión y cultural del pueblo Embera Chamí.

f. Ayuda humanitaria de emergencia

- Conceder un plazo de dos (2) meses a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV para que, concertada con los integrantes del resguardo indígena, le otorgue la ayuda humanitaria de emergencia a las familias indígenas.

RELACIÓN DE PRUEBAS

a. Aportadas con la Solicitud

- Resolución número 06 del 10 de abril de 2003, suscrita por el Presidente de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, por el cual se amplía el resguardo indígena Embera Chami de La Albania.
- Autorización para solicitar medida cautelar, dirigida por el Gobernador Indígena del Reguardo de La Albania al Director Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras.
- Plan de Salvaguarda del Pueblo Embera de Caldas, realizado por el Consejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC.



**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE PEREIRA**

- Oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dirigido a la Organización de Estados Americanos, en el cual informan que se solicitó a la República de Colombia medidas urgentes para preservar el derechos a la vida y la integridad de los líderes indígenas del resguardo La Albania.
- Estudio Preliminar del Caso del resguardo indígena Embera Chamí de La Albania, realizado por la Unidad de Restitución de Tierras.
- Acta de entrega y recibo material de predio denominado El encanto, ubicado en la vereda La Tesalia, municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, adquirido por INCODER.
- Resolución RZE 0357 de 2016, por medio de la cual la Unidad de Restitución de Tierras finaliza el estudio preliminar de la solicitud de inscripción en el registro el resguardo indígena de La Albania.

b. Recaudadas por el Juzgado

- Acta de posesión del señor Arnoldo Arcila Ramírez como Gobernador del resguardo indígena La Albania, de fecha 31 de diciembre de 2015.
- Informe de riesgo de Inminencia Nro. 024-16, de inminencia para las autoridades tradicionales y comunidades de los resguardos indígenas de Totumal y La Albania, ubicados en los municipios de Belalcazar, San José y Risaralda y el asentamiento indígena Dachi Joma del municipio de Anserma.
- Oficio de fecha 6 de diciembre de 2016, suscrito por el Gerente de Defensa Judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura, en la cual manifiesta que el Ministerio del Interior mediante Resolución 68 del 11 de febrero de 2016, certificó que el territorio del resguardo indígena La Albania, no se encuentra dentro del área de influencia directa del Proyecto Concesión Pacífico Tres.
- Certificados de tradición y libertad correspondientes a los folios de matrícula 103-21868, 103-21870 y 103-21871 a nombre del Resguardo Indígena Embera Chamí La Albania y 103-8188 y 103-330 a nombre de la Agencia Nacional de Tierras.

ACTUACIÓN PROCESAL

La cautela fue admitida mediante providencia calendada al 15 de noviembre de 2016, disponiéndose el traslado de la solicitud al Ministerio Público, Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF



JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE PEREIRA

Regional Caldas y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV Regional Eje Cafetero, para que se pronuncie al respecto y aporten las pruebas que pretendan hacer valer.

Ninguna de las entidades públicas vinculadas al trámite cautelar se opuso a las medidas solicitadas por la Unidad de Restitución de Tierras. Empero, se aclara que el Consejo Regional Indígena guardó silencio, pese a haber sido comunicada la decisión mediante oficio entregado por correo certificado el 19 de noviembre último.

En la misma decisión se ordenaron varios requerimientos que a la fecha no han sido atendidos por los representantes de las instituciones. Al Comandante de Policía del Departamento de Caldas y el Comandante de la Octava Brigada del Ejército Nacional, se le solicitó informar sobre las condiciones de seguridad y la identificación de siembras de cultivos ilícitos en la zona de ubicación del Resguardo Indígena La Albania. A la Agencia Nacional de Tierras informar sobre el proceso de adjudicación y legalización de los territorios entregados materialmente por el INCODER, a partir del año 2013, a la comunidad del resguardo indígena la Albania.

CONTESTACIONES AL TRASLADO

1. Procuraduría Judicial para la restitución de tierras

La Procuradora Judicial 45 de Restitución de Tierras, consideró procedentes todas y cada una de las medidas cautelares pedidas por la Unidad de Restitución de Tierras en favor de la comunidad Embera Chami del resguardo indígena La Albania, por encontrarse enmarcadas en la Constitución Nacional y el Decreto 4633 de 2011.

Aduce que, la posesión ancestral de las tierras constituye un mecanismo trascendental para la titularidad del territorio colectivo y que el territorio del pueblo indígena también constituye un espacio para una correlación social y cultural que el grupo étnico ha instituido históricamente, el cual además tiene una generalización simbólica, colectiva y comunitaria que les proporciona un fuerte vínculo con la tierra. Por tanto, cuando se pierde la posesión, como en el caso del desplazamiento, o en general se ponen en peligro sus derechos territoriales colectivos, el estado debe propender por la liberación de su territorio y custodiar por el derecho al retorno.

2. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF

La Directora de la Regional Caldas al contestar el traslado relacionó las acciones que adelante el instituto en el resguardo Indígena La Albania.

Expuso que para la atención a la primera infancia se cuenta con tres hogares comunitarios a través de los cuales se atienden 36 niños y niñas hasta los cinco años. Para la atención a la niñez y la adolescencia, a través de la modalidad de Generaciones Étnicas con Bienestar, se benefician 75 niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años, cuyas temáticas se desarrollan por medio de módulos educativos y encuentros familiares y en el programa se aborda la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de hábitos saludables. Dentro de la misma modalidad se ha brindado la asistencia técnica a la comunidad para que formule proyectos de desarrollo familiar, sin que la comunidad y el cabildo hayan requerido la asistencia ofertada.

3. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV

El Director Territorial para el Eje Cafetero en su intervención afirmó que si bien los grupos étnicos son víctimas en colectivo reconocidos mediante Decreto Nacional, no todos son sujetos de atención humanitaria. No obstante, para la asignación de ayuda humanitaria de emergencia a los integrantes del resguardo indígena La Albania, es necesario contar con el censo de las familias beneficiarias con su respectiva identificación y el censo de las familias que declararon haber sido víctimas de desplazamiento al momento de hacer el requerimiento ante la Unidad de Restitución de Tierras. y solamente hasta que cuenten con esa información podrán adelantar el proceso de identificación de carencias y el estado de vulneración para la asignación de la ayuda.

4. Defensoría del Pueblo Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario

El Defensor Delegado y Director de Alertas Tempranas dio a conocer que, las afectaciones territoriales vinculadas al conflicto armado que vienen impactando a la comunidad étnica asentada en el resguardo indígena de La Albania, fueron advertidas por la Defensoría desde hace aproximadamente tres años a través del Informe de Riesgo de Inminencia No. 024 -16 focalizado para las autoridades tradicionales y comunidades.

En el documento se identificó la vulneración de los derechos de los líderes indígenas consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales post desmovilizados de las autodefensas unidas de Colombia AUC, como “Cordillera” y “Urabeños” que operan en los municipios limítrofes del departamento de Risaralda, en disputa con estructuras armadas relacionadas con el Cartel del Norte del Valle, como “Los Rastrojos” con marcada influencia en la localidad de Viterbo, Caldas, por el control sobre expendios de droga y las rutas de narcóticos que atraviesa la subregión del departamento de Caldas en que se ubica el resguardo.



JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE PEREIRA

Afirma que de acuerdo con los datos recaudados, la dinámica del conflicto armado se ha caracterizado fundamentalmente por los procesos de rearmen ocurridos a partir del proceso de desmovilización del Bloque Central Bolívar de las AUC – Frente Héroes y Mártires de Guática, en grupos como Cordillera, Águilas Negras y Urabeños. Así, los impactos generados por los grupos armados ilegales abarcan procesos de control territorial, frente a los cuales la intervención de la fuerza pública y las autoridades judiciales sin adecuados protocolos de coordinación, han incrementado la situación de riesgo de la población, porque se exponen a señalamientos como informantes o delatores.

Solicita que desde el ingreso mismo de tropas del Ejército y la Policía para verificar las condiciones de seguridad en el resguardo, como se requiero por el Juzgado en el auto admisorio, se mantenga de manera permanente un puesto de mando hasta tanto se resuelva la medida cautelar.

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS LEGALES PARA RESOLVER

1. Competencia

Este Juzgado es competente para pronunciarse sobre la presente solicitud de medidas cautelares, de conformidad con los artículos 151 y 159 del Decreto 4633 de 2011, al tratarse de un asunto cuyo conocimiento se encuentra asignado al Juez de Restitución de Tierras y encontrarse el resguardo indígena de La Albania geográficamente ubicado en Caldas, departamento en el cual cuanta con jurisdicción esta unidad judicial.

2. Problema Jurídico

El problema jurídico que debe resolver esta unidad judicial se circunscribe a determinar si con fundamento en los hechos descritos y las pruebas aportadas en la solicitud, resulta necesario adoptar las medidas cautelares en favor de la comunidad indígena del Resguardo La Albania, perteneciente al Pueblo Embera Chamí, para efectos de prevenir daños inminentes o hacer cesar los daños que se estuvieren causando al pueblo y a sus territorios.

3. Solución al problema jurídico

De acuerdo con lo indicado en la solicitud, el resguardo indígena Embera Chamí de La Albania, se encuentra ubicado en los municipios de San José y Risaralda del departamento de Caldas. Posee una población de 286 indígenas, agrupados en 61 familias, de los cuales 131 habitan en la jurisdicción de Risaralda y 155 en jurisdicción de San José. La representación legal de la entidad territorial la ejerce el señor Arnoldo Arcila Ramírez, en calidad de Gobernador del Resguardo.

Se constituyó legalmente mediante resolución 035 de 1997 del INCORA, con un área de 38 hectáreas 4.511 metros cuadrados, posteriormente el territorio es ampliado mediante Resolución 006 del 10 de abril de 2003 del INCORA, en extensión de 26 hectáreas 9.916 metros cuadrados. Está conformado en cuatro globos de terreno discontinuos, i) el globo uno ubicado en el municipio de Risaralda y le corresponde la matrícula inmobiliaria 103-21868, ii) el segundo globo ubicado San José y comparte la misma matrícula inmobiliaria 103-21868, iii) el tercer globo se ubica en San José la matrícula es 103-21870 y iv) finalmente el globo cuatro ubicado en San José y la matrícula inmobiliaria es 103-21871.

Adicionalmente, el predio denominado El Encanto, con matrícula inmobiliaria 103-8188 y una área de 46 hectáreas y 8.888 metros, fue entregado por el INCODER en el año 2013, encontrándose pendiente el proceso de formalización, al igual que respecto del predio nombrado como Sinaí, con matrícula inmobiliaria 103-330 en posesión material de la comunidad del resguardo.

Descendiendo al caso en concreto, se justifica la solicitud de la medida cautelar en la imposibilidad de ejercer el derecho territorial a la autonomía y gobierno propio por parte de los dirigentes chamíes y la población indígena en general del resguardo, toda vez que grupos delincuenciales organizados derivados de los grupos armados organizados, se dedican a actividades ilícitas, entre ellas el micrográfico de estupefacientes, y bajo intimidaciones les obligan a permitir la distribución de drogas en la misma comunidad y el tránsito por su territorio para sacar la droga de los laboratorios para llevarlas a municipios cercanos.

En este orden de ideas debe precisarse, para poder acceder a las pretensiones de la medida cautelar, la relación entre el desarrollo de actividades económicas ilícitas en el territorio indígena de La Albania, con el conflicto armado interno como factor subyacente.

El conflicto armado en Colombia, ha sido reorientado a actividades relacionadas con el narcotráfico y por consiguiente es un factor de riesgo para la existencia de los pueblos indígenas, pues con la intervención por medio de las armas en los territorios ancestrales se ha generado desplazamiento, confinamiento y pérdida de sus tradiciones e identidad cultural.

Como antecedentes de tal afirmación se encuentra la sentencia T-025 de 2004 por medio de la cual se declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el fenómeno del desplazamiento, y el Auto de seguimiento 004 de 2009 que declaró el peligro de los pueblos indígenas de ser exterminados cultural o físicamente. Providencias en las cuales la Corte Constitucional hace referencia a la victimización de los indígenas, ajenos al conflicto y frente al cual se han declarado autónomos y neutrales.



**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE PEREIRA**

Entre los procesos de carácter territorial y socioeconómico derivados del conflicto, los cuales afectan a los pueblos indígenas se encuentran i) el despojo y la invasión territorial de tierras ubicadas dentro del resguardo o pendientes de titulación y ii) el desarrollo de actividades económicas ilícitas, especialmente presencia de cultivos ilícitos y la ejecución dentro de sus territorios de actividades vinculadas al tráfico de drogas.

Las pruebas documentales aportadas en el trámite dan cuenta de esa relación o entrelazamiento entre el conflicto armado y el micro tráfico, modalidad del narcotráfico consistente en el expendio y distribución local de drogas, realizado por grupos delincuenciales organizados, derivados de manera directa de grupos armados organizados pertenecientes a las autodefensas unidas de Colombia o paramilitares.

El informe de riesgo de inminencia No. 024-16 para las autoridades tradicionales indígenas y comunidad de los resguardos indígenas de Totumal y La Albania y el asentamiento indígena Dachi Joma, realizado por el Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos, da a conocer que la integridad física de los líderes Chamés de La Albania se encuentra en riesgo potencial por acciones violentas de grupos delincuenciales surgidos a partir de la desmovilización de paramilitares, reconocidos ahora como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños, Cordillera y Águilas Negras. Grupos que han consolidado el dominio de expendios de drogas y rutas de tráfico, quince siguen en disputa por la expansión de la dominación territorial.

En el mismo documento se denuncian la ocurrencia de amenazas y hostigamientos a líderes indígenas por intentar oponerse a la venta de drogas al interior de su comunidad y la relación de estos hechos con el homicidio del comunero Héctor Fabio Vásquez ocurrido el 8 de mayo de la presente anualidad. Además advierte que, los operativos de los organismos de investigación han sido poco eficientes y con ello se ha generado el incremento de riesgo y las agresiones a los representantes de la comunidad al ser señalados por esos grupos delincuenciales como delatores.

En igual sentido, el estudio preliminar del caso del Resguardo La Albania, realizado por la Unidad de Restitución de Tierras, coincide en que los grupos delincuenciales organizados, cuya presencia y actuaciones delictivas afectan a la comunidad indígena en cuestión, surge como rezago de la presencia de grupos armados organizados que diversificaron sus actuaciones a la extorsión, minería ilegal, micro tráfico, trata de personas y contrabando. Por lo que se trata de conductas que trasciende el carácter meramente delictual para convertirse en una evidente manifestación más del multiforme conflicto armado.

Como contexto refiere el estudio que la zona del bajo occidente de Caldas, donde está ubicado el resguardo La Albania, se conforma por los municipios de Belalcazar, San José, Viterbo, Anserma y Risaralda y en lo que tiene que ver con fenómenos asociados



**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE PEREIRA**

al tráfico de estupefacientes, en la problemática confluyen municipios del departamento de Risaralda y Norte del Valle, con presencia de grupos al margen de la ley como el Cartel del Norte, Los Rastrojos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Frente 47 de las FARC-EP y paramilitares del Bloque Central Bolívar.

Explica también que, en el eje cafetero la presencia de paramilitares inicio en la década de los 90's bajo el control de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias "Macaco" quien incursionó en el negocio del narcotráfico y al asociarse con personajes como Alias Rasguño y Vicente Castaño los carteles contaron con el apoyo del Bloque Central Bolívar, alianza acompañada por Julián Bolívar y Ernesto Báez para el control territorial ya que entre mayor dominio mayores ganancias derivadas del narcotráfico. Hacia el año 2001 Macaco asumió el comando de las AUC, se hizo llamar Javier Montañez y era la cabeza principal del Bloque Central Bolívar, el cual operaba en el Eje Cafetero por medio de los frentes Héroes y Mártires de Guática y el Cacique Pitinta. Si bien los combatientes de este bloque se desmovilizaron y el mismo "Macaco" se entregó en el año 2008 para ser juzgado dentro del proceso de paz de entonces, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Velez, muchos de los hombres a su mando se enlistaron en distintos grupos delincuenciales dentro de las denominadas BACRIM, bandas criminales emergentes, dentro de aquellas las conocidas como La Cordillera, en el Eje Cafetero, los Urabeños, los Rastrojos y los Rolos.

La Unidad de Restitución de Tierras aduce que, en las labores de recolección de información en campo, se encontraron con temor por amenazas el constreñimiento para la distribución de drogas en el resguardo, la amenaza al Gobernador en el año 2013 por parte de uno de los cabecillas del grupo que distribuye drogas para que se aliara con ellos permitiera la actividad ilícita, el uso de la carretera que atraviesa el territorio para transitar con droga e insumos utilizados en los laboratorios, restricción de la movilidad a partir de las 6:00 de la tarde, distribución de cocaína a menores de edad de la comunidad indígena y las intimidaciones directas a integrantes de la guardia indígena.

En este orden de ideas, del cumulo documental referido en los párrafos precedentes se concluye sin dubitación alguna que, en el caso del resguardo de La Albania, la presencia de grupos delincuenciales dedicados a actividades afines con el tráfico de estupefacientes es un factor subyacente del conflicto armado por ser una reconfiguración de las autodefensas. Conclusión que en nada desaviene con las causas de violación a los derechos humanos, derechos fundamentales y colectivos o infracciones al derecho internacional humanitario, referidos en el artículo 3° del Decreto Ley 4633 de 2011, el cual define cuando las comunidades indígenas como sujetos colectivos y el territorio que habitan, son considerados víctimas.

Por consiguiente, sin aseverar que las persona de la comunidad Embera Chamí que conforma el resguardo indígena de La Albania son víctimas del conflicto armado interno y titulares de las medidas especiales de protección y reparación, porque para



**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE PEREIRA**

ello se debe esperar el agotamiento de la ruta administrativa, la caracterización de las afectaciones territoriales, la inscripción en el registro de tierras presuntamente despojadas y, de ser del caso, la sentencia judicial que decreta que deben restituirse sus derechos territoriales; existen razones suficientes para sustentar la procedencia de la intervención temprana del Estado para evitar perjuicios ciertos e inminentes a los derechos de la comunidad indígena.

Lo anterior, porque efectivamente la introducción de los grupos delincuenciales en el resguardo afecta desde todo punto de vista los derechos de la comunidad indígena y genera un inminente peligro de exterminio de este pueblo, esto porque con ocasión de las amenazas de lesionar su integridad y el temor que generan las represalias en contra de quienes han presentado oposición, los líderes Chamés se encuentran en imposibilidad de ejercer autoridad, hacer valer su autonomía y proteger a la comunidad de tales hostigamientos, además los territorios sagrados resultan profanados con lo cual se altera el estrecho lazo existente entre territorio y comunidad; las prácticas culturales ancestrales se diluyen en medio de la legitimación de conductas socialmente nocivas como la violencia, la pérdida de valores inherentes a su identidad cultural y el consumo de drogas; circunstancias que acarrearán pobreza, marginalidad, estigmatización social, discriminación racial y en general vulnerabilidad.

Corolario, resultan necesarias y urgentes la adopción de medida cautelares para hacer cesar, con carácter de gravedad y urgencia el daño al territorio y la vulneración de derechos colectivos de la comunidad Embera Chamí del resguardo indígena La Albania, hasta tanto se agote la ruta administrativa de protección de derechos territoriales étnicos a cargo de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, territorial Valle del Cauca – Eje Cafetero.

Los mismos argumentos expuestos en los cuales se hace mención a la situación de riesgo, temor y constreñimiento de los líderes Chamés por la presencia de sujetos pertenecientes a organizaciones delictivas en el resguardo, son el fundamento para el decreto de las medidas de protección en favor de los representantes comunitarios y de fortalecimiento de la seguridad con presencia de la fuerza pública e investigación de denuncias, conforme con lo pedido en la solicitud por cuanto son hechos que constituyen un irrespeto a la autoridad tradicional indígena, afectan la autonomía e integridad política y organizativa de los indígenas, restringen el acceso al territorio y confinan a los integrantes de la comunidad.

La petición de ordenar que se ejecuten las cautelas otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no será acogida por cuanto con la sola prueba aportada¹ no se acredita su vigencia, toda vez que se trata de un documento del año 2001 y en el mismo se insta a la República de Colombia a adoptar lo necesario para la protección de 40 líderes indígenas, más no se trata de la comunicación de una decisión. Su aporte es de carácter probatorio, pues es una muestra adicional del hostigamiento

¹ Folio 146, reverso, cuaderno de pruebas.



**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE PEREIRA**

padecido desde hace varios años por las autoridades indígenas del departamento de Caldas y el resguardo de La Albania.

En lo concerniente con las protección jurídica de los predios el Encanto y El Sinaí, en el dossier se encuentra que se trata de terrenos destinados a la ampliación del resguardo, pues existe una acta de entrega material del primero y de acuerdo con lo afirmado por el representante de la Agencia Nacional de Infraestructura, el segundo fue adquirido para el mismo fin, sin que a la fecha se haya formalizado la titulación y figurando como propietaria la Agencia Nacional de Tierras. Entidad estatal que a la fecha ha guardado silencio frente al requerimiento en que se le pidió que certificara el estado del proceso de adjudicación y legalización.

Finalmente, se estiman adecuadas y pertinentes las medidas cautelares de atención a las y los menores de edad indígenas afectados por la expansión del consumo de drogas y la asignación de ayuda humanitaria a las familias víctimas de desplazamiento forzado, una vez se cumpla con su identificación, para superar las situaciones de vulnerabilidad social y marginalidad en que se encuentra la comunidad. Y si bien, el ICBF indica que tiene presencia institucional a través de hogares comunitarios y la modalidad de generaciones étnicas con Bienestar, esta atención debe ser ampliada a toda la población, previo identificación de carencias nutricionales demás derechos de niños, niñas y adolescentes cuyo restablecimiento pueda ser atribuido al instituto, conforme con su misión institucional.

Se adicionará por parte del juzgado la orden a los Alcaldes de los municipios y el Gobernador del Departamento en que se localiza el resguardo, de mejorar las vías de acceso al territorio, toda vez que por el mal estado se torna más difícil la llegada de las instituciones y la reactivación de su estabilización socioeconómica, minimizando con ello el riesgo de arraigo de una economía ilícita, en razón a la escasez de la tierra y la falta de alternativas para la generación de ingresos.

Por lo expuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira,

RESUELVE

PRIMERO. DECRETAR en favor de la comunidad indígena Embera Chamí del Resguardo La Albania, ubicado en los municipios de Risaralda y San José del departamento de Caldas, las medidas cautelares solicitadas por la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero, hasta tanto se presente la solicitud judicial de restitución de derechos territoriales indígenas, plazo que no podrá ser superior a seis (6) meses contado a partir de la fecha de publicación de la presente providencia.



**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE PEREIRA**

SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección -UNP- que de manera inmediata proceda a adelantar las gestiones necesarias para garantizar la seguridad, la vida e integridad física del Gobernador Indígena ARNOLDO ARCILA RAMIREZ, y demás miembros y líderes del comité de gobierno del resguardo La Albania, amenazados por parte de los grupos delincuenciales organizados que hacen presencia en la entidad territorial.

TERCERO. ORDENAR al Comandante de Policía del Departamento de Caldas, al Comandante de la Octava Brigada del Ejército Nacional y al Director de la Unidad Nacional de Protección, garantizar la protección al territorio colectivo y la seguridad de las personas integrantes de la comunidad de cualquier tipo de acción, amenaza o represalia de parte de los grupos delincuenciales o personas que realizan actividades ilícitas en el resguardo, además de incrementar el número de efectivos dentro de los municipios de San José y Risaralda.

CUARTO. ORDENAR a los Comandantes de Policía de los municipios de Risaralda y San José y del departamento de Caldas, instalar un puesto de control permanente en el resguardo indígena de La Albania, previos a su ingreso para la verificación de las condiciones de seguridad y presencia de cultivos ilícitos, solicitado en el auto admisorio de fecha 15 de noviembre de 2016.

QUINTO. ORDENAR al Ministerio del Interior adelantar procesos de fortalecimiento y capacitación a los líderes de la comunidad y a la Guardia Indígena para el fortalecimiento del gobierno propio y la exigencia de derechos étnicos.

SEXTO. DISPONER que la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Ministerio del Interior y su Unidad Administrativa especial denominada Unidad Nacional de Protección -UNP-, para adelantar cualquier acción de las ordenas en los numerales anteriores, debe coordinar y concertar su intervención con las autoridades de la comunidad indígena del Resguardo La Albania, apoyar el fortalecimiento de la Guardia Indígena y reconocer el enfoque diferencial étnico.

SÉPTIMO. REMITIR a la Fiscalía General de la Nación, Seccional Caldas, copia del informe denominado Estudio Preliminar del Caso del Resguardo La Albania, elaborado por la Dirección de Asuntos étnicos de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas, para que adelante las investigaciones correspondientes a las denuncias realizadas por los líderes indígenas sobre las amenazas recibidas y la realización de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes en el territorio indígena.

OCTAVO. ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Anserma, Caldas la inscripción de la solicitud de restitución en los folios de matrícula 103-8188 correspondiente al predio denominado El Encanto y 103-330 correspondiente al predio Sinaí, ubicados en los municipios de Risaralda y San José, respectivamente, los cuales

figuran a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, conforme con el numeral tercero del artículo 151 del Decreto Ley 4633 de 2011.

NOVENO. ORDENAR a la Agencia Nacional de Tierras, adelantar el procedimiento administrativo de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales, consagrado en el Decreto 2333 de 2014, respecto de los predios El Encanto y Sinaí identificados con folios de matrícula inmobiliaria 103-8188 y 103-330 y evitar cualquier acción de adjudicación de los predios a personas o comunidades distintas al Resguardo Indígena La Albania.

DÉCIMO. ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, que en el ámbito de sus funciones y en concertación con la cosmovisión del pueblo Embera Chami y las directrices de las autoridades indígenas, diseñar e implemente un plan de atención dirigido a niños, niñas y adolescentes y sus familias, para lo cual debe extender la cobertura al ciento por ciento (100%) de la población que requiera de la atención para el restablecimiento de sus derechos, en especial, para la primera infancia y los y las adolescentes con problemas de uso de drogas estupefacientes.

DÉCIMO PRIMERO. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero, entregar al Director Territorial Eje Cafetero de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas el censo de las familias que conforman el resguardo indígena La Albania, al igual que el censo de las familias que declararon haber sido víctimas de desplazamiento al momento de recolectar la información del estudio preliminar.

DÉCIMO SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Dirección de Asuntos Étnicos de Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero, adelantar la caracterización de afectaciones de que trata el Decreto 4633 de 2011, sobre la comunidad Embera Chamí y el territorio del Resguardo Indígena de La Albania.

DÉCIMO TERCERO. CONCEDER a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, un plazo de dos (2) meses para que, otorgue la ayuda humanitaria a los núcleos familiares de la comunidad afectados por hechos de violencia, término contabilizado a partir de las entrega del censo de familias por parte de la Unidad de Restitución de Tierras.

DÉCIMO CUARTO. ORDENAR A LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE RISARALDA Y SAN JOSÉ Y AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, mejorar las vías de acceso al resguardo indígena de La Albania, con el fin de evitar no solo el aislamiento de la comunidad, sino también la seguridad de los miembros de la fuerza pública cuando ejerzan el control y las acciones aquí ordenadas.



**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE PEREIRA**

DÉCIMO QUINTO. ORDENAR A LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE RISARALDA Y SAN JOSÉ Y AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, construir en la zona del resguardo el respectivo salón donde el consejo indígena tome sus decisiones y el calabozo donde impongan sus penas acorde su propia legislación.

DÉCIMO SEXTO. DECLARAR QUE LAS ORDENES CAUTELARES emitidas en esta providencia son de cumplimiento inmediato por parte de las entidades obligadas, salvo que en el numeral correspondiente se haya indicado un término diferente y para efectos de seguimiento deben rendir informe bimensual de avance y cumplimiento.

DÉCIMO SÉPTIMO. Oficiar al representante legal del Consejo Regional Indígena de Caldas - CRIDEC, para que disponga los trámites necesarios para traducir, en el menor tiempo posible, la presente providencia a la lengua Embera Chami, para que sea puesta en conocimiento de la comunidad indígena del Resguardo La Albania.

NOTIFÍQUESE

FANDER LEIN MUÑOZ CRUZ

Juez